

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Referencia: 110013335 009 **2019 00207 00**
Demandante: Myriam Lucía Galeano Gutiérrez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(Rechaza demanda)

1. La señora Myriam Lucía Galeano Gutiérrez a través de apoderado judicial formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, para que se declare la nulidad de la Resolución 6852 del 03 de octubre de 2016 que reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación por aportes y en consecuencia se reliquide con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionado.

2. Ahora bien, encontrándose el expediente para decidir sobre la admisión de la demanda, el Despacho advierte lo siguiente:

3. Petición previa

3.1. Por medio de la Resolución 6852 del 03 de octubre de 2016 la entidad demandada reconoció pensión vitalicia de jubilación por aportes en favor de la demandante, en cuantía de \$2.304.518,00 a partir del 25 de abril de 2016.

3.2. De los hechos y las pretensiones de la demanda, se observa que no existe petición previa en donde solicite la reliquidación de la pensión con la inclusión de los factores salariales que considera fueron excluidos injustamente de la liquidación de su pensión.

3.3. Constituye el fundamento de este estudio la razón, la causa, el motivo para establecer el legislador, desde anteriores códigos, un requisito previo a acudir al juez que se conoce como la vía administrativa, en donde se integran la solicitud, con las resoluciones o diferentes decisiones, porque comprende lo relacionado con los recursos que se interpongan.

3.4. El numeral 2 del artículo 161 del CPACA, consagra como un requisito previo para demandar ante esta jurisdicción, el agotamiento de la vía administrativa, que no solo hace referencia a la interposición de los recursos que por ley resultan obligatorios, sino que también implica que antes de acudir a la instancia judicial, el administrado debe dar la oportunidad a la entidad demandada de pronunciarse sobre sus pretensiones – no <<ocultas>> - e inconformidades.

3.5. Esta exigencia ha sido llamada, por la jurisprudencia y la doctrina, como el privilegio de la decisión previa, y en virtud de ella es necesario que el administrado obtenga el pronunciamiento de la administración, respecto de los derechos que pretende reclamar ante la jurisdicción, como quiera que <<la administración pública, a diferencia de los particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si previamente no se le ha solicitado por el administrado una decisión sobre la pretensión que se propone someter al juez>>.¹ Por lo anterior se analizará en extenso el tema.

3.6. Privilegio de lo previo

Finalidades:

- 3.6.1. Desarrolla la distribución de las ramas del poder público;
- 3.6.2. La administración tiene como privilegio, frente al ciudadano, que debe ser requerida por este para que resuelva sobre lo que podrán ser sus pretensiones ante el juez;
- 3.6.3. Da al ciudadano la posibilidad de obtener una decisión favorable sobre lo pretendido sin necesidad de acudir a un juez;
- 3.6.4. Da la oportunidad a la administración de rectificar;
- 3.6.5. Reduce razonablemente el acceso a la administración de justicia;
- 3.6.6. Efecto útil del lenguaje; y,
- 3.6.7. La doctrina y la jurisprudencia de refuerzo.

3.6.1. Lo que distingue y tipifica la función jurisdiccional es la ejecución de la ley en los casos de controversia

3.6.1.1. De la razón para dividir en ramas el poder público. Del principio de división del poder en ramas corresponde destacar, en primer lugar, que sirve como primera fuente de distribución de competencias y, en segundo lugar, que por lo anterior constituye regla de competencia para la rama ejecutiva, en adelante administración, como una auténtica exención o exclusión de los litigios, salvo que la ley expresamente le asigne funciones jurisdiccionales, como sucede en los juicios de policía, cuando sus decisiones no son susceptibles de control judicial.

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-sección B, sentencia del 09 de junio de 2005, Rad. 2270-04, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

3.6.1.2. Dentro de la concepción indicada existe el privilegio de la decisión previa que tiene por finalidad, entre otras, asegurar el respeto de la distribución de funciones entre las ramas del poder público, como señala el epígrafe de este apartado, **la función jurisdiccional se reduce exclusivamente a dirimir conflictos en la aplicación de la ley**, mientras que otros órganos del Estado ejecutan la Ley en los restantes supuestos.

3.6.1.3. Entonces, cuando no existe ese supuesto, choque requerido, estamos ante una **función de la administración** o función legislativa, pero que no debe entrar a suplir o invadir el juez, desconocería el requisito de procedibilidad.

3.6.2. El privilegio frente al ciudadano es la necesidad de pedirle que resuelva sobre lo que podrán ser sus pretensiones ante el juez

3.6.2.1. Naturaleza. Se trata de un privilegio, especialmente en sus inicios, porque los ciudadanos en conflicto entre sí podían acudir directamente al juez, hoy morigerado con el requisito de la conciliación prejudicial, mientras frente al Estado constituye necesidad procesal prejudicial, de acceso a la justicia, tiene que pedirle a la administración que resuelva primero el asunto sobre lo que posteriormente podrán ser sus pretensiones ante el juez.

3.6.2.2. Finalidades. Ese requisito no desconoce el derecho de acceso a la justicia conforme con la Corte Constitucional, como tampoco en el derecho español² de donde dicen los estudiosos que se tomó, y muy por el contrario da, tanto a la administración como al administrado, la oportunidad de resolver la diferencia, evita tanto un engorroso y tal vez dilatado trámite como congestión para la justicia, adicional al desarrollo del respeto de las competencias entre las ramas del poder público.

3.6.3. Da al ciudadano la posibilidad de obtener una decisión favorable sobre lo pretendido sin necesidad de acudir a un juez

3.6.3.1. Se considera que junto a la finalidad de dilatar el acceso a la justicia, también le permite, como un derecho, al solicitante dar a conocer sus razones para que la administración acceda a su petición, es decir, para persuadirla de que le asiste la razón, que tiene el derecho, aspecto que unido a los recursos evidencia o significa ni más ni menos que es una oportunidad para cuestionar.

² Ver del Tribunal Constitucional español, sentencias 120 y 122 de 19 de abril de 1993.

3.6.3.2. En otros casos este despacho ha establecido que no existe controversia y por lo mismo carece la demanda del requisito de procedibilidad del agotamiento de la actuación administrativa cuando solicita reconocer una pensión y se ha reconocido una pensión, o se piden cesantías y se ordena el pago de cesantías, porque luego se pretende judicialmente un régimen diferente, pero lo pretendido con la demanda no corresponde a lo expresado en la solicitud a la administración, se ocultó lo que se quería.

3.6.3.3. Como el fundamento de este despacho está relacionado con lo pedido y lo decidido, sin considerar que fuere o no susceptible del recurso de apelación, exigir la interposición del recurso de apelación es diferente a este análisis que parte del supuesto de que no cualquier petición a la administración dará acceso a toda pretensión ante el juez, sería convertir en irrelevante lo que se solicite a la administración porque siempre habilitaría para demandar.

3.6.3.4. Lo anterior lleva a concluir que pese a que el legislador impone ese privilegio de la **petición previa** en favor de la administración la interpretación se da solo en su contra y en favor de quien no somete, en estricto sentido, al conocimiento de la administración lo que será objeto de un litigio judicial.

3.6.4. Da la oportunidad a la administración de rectificar

3.6.4.1. Con la petición y con los recursos a que tienen derecho las personas frente a la administración, el legislador está previendo también una oportunidad para que la administración perfeccione o cambie su decisión, pues como dice el artículo 74 CPACA sobre la impugnación en reposición, tienen por finalidad expresar la inconformidad contra las decisiones de las autoridades, bien sea porque considera que es confusa (pide aclarar), contraria a derecho (revocar), parcialmente contraria a derecho (modificar) o incluso porque omite algo que necesariamente debe ser objeto de aquella decisión (adicionar).

3.6.4.2. Pero, si como sucede con los ejemplos de la pensión y las cesantías, se pide sin precisar el régimen que se pretende, pues no se puede afirmar que la decisión no corresponde a lo pedido.

3.6.4.3. En el caso de autos y sentencias, si se recurren en supuesto similar, se accedió a lo pedido, el resultado es que se desestima el recurso bien sea por falta de agravio o por carecer de legitimación para recurrir.

3.6.5. Reduce razonablemente el acceso a la administración de justicia

3.6.5.1. La historia de este privilegio, la fundamentación para la expedición de nuestros códigos para lo contencioso administrativo, desde la Ley 167 de 1941, da cuenta de la existencia de ese propósito de dilatar, reducir, el acceso a la administración de justicia y, es igual con el CPACA.

3.6.5.2. En líneas anteriores se dejó registrado que nuestra Corte Constitucional, como la española, en su Sentencia C-520 de 2016, al definir la constitucionalidad del requisito de procedibilidad, estableció su idoneidad para la finalidad expresada, esta es, la necesidad del medio, para razonablemente eludir o por lo menos retardar, el control de juez, facilitar el autocontrol, mecanismo de auto tutela que permite a la administración la autocorrección.

3.6.6. La importancia del lenguaje

3.6.6.1. Tampoco se considera necesario extenderse sobre la importancia del lenguaje en asuntos normativos pero se recordará con Valencia Zea³ que la interpretación gramatical se refiere al conocimiento del derecho y a la precisión de su sentido, deducido de las propias palabras del legislador, junto a ello señala el autor que una deficiencia es creerla suficiente:

<<La sola comprensión de las palabras y proposiciones que han servido de marco a la ley pueden revelarnos el auténtico querer del legislador, lo que acaece en los casos en que los artículos del Código o de la ley quedan correctamente redactados y su inteligencia no se presta a confusiones. En esta hipótesis la interpretación gramatical coincide con la interpretación lógica.

(...)

*El problema de los conceptos, de las definiciones, de las clasificaciones, es asunto que **pertenece más bien a la doctrina**⁴ que al legislador. Tampoco el intérprete puede reducirse a una discusión sobre las palabras o términos; su función se trunca y termina siendo aislada. El derecho como sistema y sus principios deben ser su objeto>>. (Negrilla agregada).*

3.6.6.2. Acogiendo lo señalado, la función del juez se trunca, es aislada si no se mira el sistema (desde las ramas del poder) y sus principios (desde su origen es un principio el privilegio de lo previo), las finalidades y la manera de alcanzarlo en los casos concretos.

3.6.6.3. Por lo brevemente expuesto en este acápite es que se debe revisar si resulta lógico suponer que introducir un cambio en la norma, tanto los juristas preparadores del nuevo código como el legislador que acogió, en lugar de la expresión **agotamiento de la vía gubernativa**, a la vigente de **actuación administrativa**, fue impensado, inadvertido, improvisado.

³ VALENCIA ZEA Arturo, Derecho Civil, T. I., Parte General y Personas, pág. 134.

⁴ Se destaca que integró la Corte Suprema de Justicia como magistrado de la Sala de Casación Civil.

3.6.6.4. **Efecto útil.** Suponer intrascendencia del cambio es contra evidente, desconoce el principio del efecto útil, conforme con el cual el intérprete debe desentrañar algún propósito en los cambios de palabras que emplea el legislador, no desestimar la diferencia gramatical (art. 28 C.C.) como sería suponer que para nada se hizo ese cambio.

3.6.6.5. Por una parte, vale recordar que en el anterior código la expresión del agotamiento de la vía gubernativa se limitaba a la exigencia de interponer los recursos cuando fuere necesario para acceder al proceso judicial, mientras la segunda expresión, del CPACA, comprende la parte primera del código, los artículos 1º a 102º, desde la solicitud o petición hasta cuando se agota el recurso necesario, generalmente el de apelación, para poder acudir a la jurisdicción.

3.6.6.6. El CCA precisaba las dos cosas, en su artículo 2 el <<Objeto de la actuación administrativa>> y en el artículo 63 <<El agotamiento de la vía gubernativa>>, mientras que en el CPACA el agotamiento es de la actuación porque no existe la previsión, se suprimió una norma con el texto del artículo 63, aspecto que ratifica que, en el presente caso, no es menor cosa el cambio del lenguaje pues se acompañó de otros cambios como el de normas completas relacionadas con el asunto, lo que se hace ostensible en el ejemplo citado.

3.6.6.7. Así las cosas, el concepto de la denominada actuación administrativa, hoy debe tener un alcance no restringido exclusivamente a los recursos consagrados en la ley. El alcance del numeral 2 del artículo 161 del CPACA, como requisito de procedibilidad, no debe ser literal, en términos sencillos que no peyorativos, para actuar como jurista no basta saber leer y escribir para tener la comprensión magistral del aparte que dice <<haber ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios>>.

3.6.6.8. En este esfuerzo por aproximarse más certeramente a la voluntad del legislador, resulta necesario acudir al sistema, ver la norma dentro del todo, la distribución de las ramas, al alcance del concepto del privilegio de lo previo, en especial a sus fines y en concreto de la utilidad que deben tener los cambios normativos, de **agotamiento de la vía gubernativa a la actuación administrativa.**

3.6.6.9. Para prevenir confusiones, se advierte que la constitucionalidad del artículo 135 del Decreto 01 de 1984, por parte de la Corte Constitucional⁵, se limitó al agotamiento previo del recurso de apelación, como requisito para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no comprendió estudio de asuntos como el del contenido de la petición.

⁵ Corte Constitucional, sentencia C-319 de 2002. También son casos de analogía los estudiados en las sentencias C-313 de 2003, C-060 de 1996, C-792 de 2006.

3.6.7. La doctrina y la jurisprudencia de refuerzo a la tesis de necesidad de controversia previa

3.6.7.1. Una cita para reflexionar, conforme con el profesor español José Ramón Parada Vázquez, considerado este asunto en la Universidad de Madrid:

<<Pero, aun prescindiendo de esto, aun poniéndonos en el caso de que todas las decisiones de la Administración pudiesen ejecutarse sin perjuicio de tercero, con tal que a éste se le permita reclamar ante los Tribunales, ¿no sería una cosa ridícula, monstruosa, que choca con el sentido común, el decir que la Administración, dirigiéndose al individuo, había de contestar a su reclamación y decirle: "Espera; yo sigo mi camino, porque creo que ese acto es útil al bien común; yo no lo entiendo muy bien, a la verdad, no estoy perfectamente convencida, pero ahí está un Tribunal que decidirá quién de los dos tiene justicia"? Para mí, ésta es la idea más absurda que puede presentarse de la Administración de un país; esta idea la degradaría a los ojos de los administrados, dándole a entender que la Administración no conocía sus intereses ni los derechos de la sociedad>>. (J. POSADA HERRERA, Lecciones de Administración, 1843)

3.6.7.2. El mismo profesor advierte que *<<Se trata de un proceso contencioso al servicio directo de la resolución de cuestiones conflictivas y no de la apelación o revisión de actos administrativos ejecutorios>>*, referencia que se hace para insistir en la necesidad de que la justicia conoce exclusivamente **en los casos de controversia**, que el proceso contencioso ni tiene por qué ser un proceso de apelación, ni tampoco tiene por qué volver a ser un proceso de primera instancia para las controversias del Derecho administrativo.

3.6.7.3. Surge toda dificultad, a juicio del despacho, de la imprecisión sobre el alcance de la denominada vía gubernativa, por ello es necesario identificarla mejor, continuando con ese propósito.

3.6.7.4. Precisión conceptual de las expresiones actuación administrativa y vía gubernativa. El Consejo de Estado⁶ ha señalado que existen dos procedimientos administrativos distintos:

<<El uno referido a la "actuación administrativa" que culmina cuando la Administración unilateralmente adelanta y define la investigación a través de la decisión que se materializa con la expedición y notificación del acto administrativo (entendido como la emisión de voluntad de la autoridad con el propósito de que produzca efectos jurídicos) vale decir, la resolución mediante la cual se pronuncia la Administración imponiendo la sanción o absteniéndose de hacerlo; y el otro, la denominada "vía gubernativa" instituida para garantizar el derecho de defensa y contradicción de los posibles afectados frente a las decisiones administrativas y que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, como los de reposición de apelación, que corresponden a una etapa diferente, la de discusión y que están gobernados por sus propias reglas, como la del silencio administrativo>>.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, junio 19 de 1998, RAD: 8498, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo.

3.6.7.5. En la sentencia arriba citada el Consejo de Estado, con legislación anterior, hizo la distinción, similar a como se está interpretando por este despacho, porque esa diferencia incidía en la respuesta al problema jurídico a resolver, con lo cual la vía gubernativa se concreta con los recursos de reposición y de apelación, que corresponden a una etapa diferente, la de discusión y que están gobernados por sus propias reglas, como la del silencio administrativo.

3.6.7.6. El propio Consejo de Estado⁷ se refirió, también en vigencia del CCA, a la necesidad interponer el recurso de reposición para agotar la vía gubernativa o requisito de procedibilidad, advierte que los asuntos **no planteados no se pueden invocar después en la demanda** y se refirió a la actuación administrativa.

3.6.7.7. Al acudir a la doctrina se advierte que allí también comprenden en forma más amplia el concepto de actuación administrativa, como contraste del agotamiento de la vía gubernativa. Así, en el contexto del código anterior, Montaña⁸ indica:

<<El control judicial sobre la actuación administrativa tiene como complemento un control administrativo, es decir, un control que es desarrollado por la misma administración pública de manera previa y muchas veces constitutivo de requisito de procedibilidad para la posterior acción del aparato judicial>>.

3.6.7.8. Se observa que según Montaña, se requiere de doble revisión, del solicitante quien está obligado a discutir la legalidad de la actuación ante la misma administración pública y ésta a su vez está obligada a revisar su comportamiento, y adicionalmente, para acudir a la justicia también, es decir, se exige ese control, se evidencia que ese control adquiere una connotación de controversia previa y necesaria para el desarrollo de una controversia posterior, dirimida mediante el ejercicio de funciones judiciales. Por su parte Güecha⁹ ha expresado:

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de septiembre de 2007, RAD. 1995-12217, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

⁸ Fundamentos de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia Bogotá, 2010, pág. 249.

⁹ GÜECHÁ MEDINA, Ciro Nolberto, Derecho Procesal Administrativo, Bogotá, 2014, edit. Ibáñez, pág. 461.

*<<El agotamiento de la vía gubernativa implica requisito de procedibilidad para acudir a la vía judicial, en cuanto a que si no se ha cumplido con el trámite administrativo previo, la demanda contencioso administrativa será rechazada, por falta de cumplimiento de dicho requisito; el cual no solo implica formular una solicitud a la Administración y la impugnación a través de los recursos la decisión proferida, por no estar de acuerdo con la misma, sino que **la solicitud en vía administrativa, debe estar acorde con las pretensiones en la acción judicial**>>. (Negrilla agregada).*

3.6.7.9. Es decir, en la actuación administrativa existen dos momentos procesales frente a un acto administrativo. El primer momento se refiere a la actuación administrativa tendiente a la expedición de un acto administrativo definitivo. El segundo momento surge con posterioridad a la expedición del acto administrativo y consiste en la posibilidad que tiene el interesado de impugnar el acto administrativo, ante la misma administración, para aclarar, modificar o revocar el acto administrativo. Este planteamiento doctrinario coincide con la jurisprudencia del Consejo de Estado anterior a la vigencia del CPACA, en especial la sentencia del Consejo de Estado del 19 de Junio de 1998, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo, acerca de la existencia de dos procedimientos administrativos diferentes.

3.6.7.10. La sanción, entendida en los términos del artículo 6 del Código Civil, cuando no ha tenido la Administración oportunidad para considerar los motivos de inconformidad que se revelan con la demanda ante el juez, como no existió controversia o litigio sustancial tampoco habilita el inicio de la solución procesal, razón por la cual el asunto no es susceptible de control judicial, mientras no preexista un conflicto entre los miembros de la sociedad (artículo 169 num. 3 CPACA).

3.7. Caso concreto

3.7.1. Conforme a lo expuesto, se advierte para el caso de la señora Myriam Lucía Galeano, no obra en el expediente **petición** alguna elevada ante la Administración, en la que solicite la reliquidación de su pensión de jubilación en los términos pretendidos en la demanda o prueba que permita inferir que al momento de solicitar el reconocimiento pensional, derecho que le fue reconocido en Resolución 6852 del 03 de octubre de 2016, su solicitud estuvo dirigida en iguales términos a los aquí solicitados.

3.7.2. Por lo anterior, no es claro qué se pidió por la parte actora, si petitionó, ante la entidad demandada, con la finalidad de saber si se accedió o no a lo solicitado, para el caso si se pidió expresamente que su pensión de jubilación fuera liquidada con el 75% de la totalidad de factores salariales devengados durante el año anterior a la consolidación de su estatus pensional; por lo tanto, no le dio la oportunidad de hacer el pronunciamiento que en derecho corresponda a fin de acceder o no a sus pedimentos, es decir, desconoció ese privilegio legal de la administración en tanto no agotó el requisito de procedibilidad establecido en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA.

3.7.3. Por economía procesal no se debe continuar este trámite que está previsto terminará sin utilidad para nadie y con desgaste de los sujetos procesales.

3.7.4. Acontece lo anterior porque la presunción de legalidad del acto administrativo hace suponer que la entidad accedió a lo que le fuera pedido y si no se desvirtúa ello resulta imposible satisfacer el requisito de congruencia que debe existir entre petición, demanda y sentencia.

3.7.5. Finalmente, se tiene presente la exigencia de congruencia entre lo solicitado a la administración, lo pretendido con la demanda, las excepciones y la sentencia, lo que resulta imposible en estos casos porque lo pedido a la administración no coincide con los fines de este proceso.

3.7.6. En efecto, cuando no ha tenido la administración oportunidad para considerar estos motivos de inconformidad que sólo son traídos directamente al proceso, es decir, no se le pidió la aplicación de las normas en determinada forma, con el mismo sentido que se trae en la demanda, entonces en el caso no se dio un litigio sustancial, para pretender solución procesal, el asunto no es susceptible de resolver por el juez **porque el asunto no es susceptible de control judicial** mientras no preexista un conflicto entre miembros de la sociedad (artículo 169 núm. 3 CPACA).

3.7.7. En sentido contrario, solamente si se pronunció la autoridad en forma diferente a la solicitada por quien luego demanda, cuando la administración aplica la norma o decide el asunto según su criterio diferente al que le manifestó el ciudadano, con un acto administrativo que ni considera sus argumentos, ese acto cuya legalidad se presume, contiene en sí, crea el litigio sustancial, antes no, esto significa que es indispensable demostrar que **se le pidió con precisión algo diferente a lo decidido**, se le expresó a la entidad para que conociera un criterio diferente, una interpretación distinta, para que ella tuviera la oportunidad de considerar o reconsiderar el asunto con otra visión.

3.7.8. En consecuencia, el Despacho procederá, en los términos de ley, a rechazar la demanda por **no ser un asunto susceptible de control jurisdiccional**.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.**,


RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la demanda de plano por no ser asunto susceptible de control jurisdiccional.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al interesado el original y sus anexos, sin necesidad de desglose y una vez ejecutoriado este proveído y hechas las anotaciones de ley **ARCHÍVESE** el expediente.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado **Yohan Alberto Reyes Rosas** identificado con c.c. 7.176.094 de Tunja – Boyacá y T.P. 230.236 como apoderado de la parte actora, para los fines y los efectos del poder obrante en el folio 12 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Y AHL

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

Miryam Yanneth Martínez Cortes
Secretaria

